

# Navegar por las limitaciones para progresar: Examen del impacto de las normas fiscales de la UE en las inversiones sociales y ecológicas

Sebastian Mang y Dominic Caddick



NEW  
ECONOMICS  
FOUNDATION

CONFEDERATION  
SYNDICAT  
EUROPEEN  
TRADE UNION



Juntos contra la austeridad - Bruselas, 12 de diciembre de 2023

# CONTENIDO

---

**La importancia de la inversión pública para cubrir las necesidades de inversión social y ecológica**

---

**¿Puede la UE hacer frente a sus carencias de inversión verde y social?**

---

**Metodología**

---

**Resultados**

---

**Recomendaciones**

---

**Conclusiones**

---

**Notas finales**

El acuerdo político entre el Consejo y el Parlamento Europeo ha introducido nuevas referencias numéricas de deuda y déficit, que obligan a reducciones anuales de la deuda y el déficit que requerirán recortes presupuestarios innecesarios. La comparación del acuerdo político sobre las normas fiscales con los déficits estimados de inversión social y ecológica muestra que solo tres países (Dinamarca, Suecia e Irlanda) pueden permitirse satisfacer las necesidades de inversión social y ecológica con estas normas. Incluso si las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia continuaran después de 2026, solo cinco países (Dinamarca, Suecia, Irlanda, Croacia y Lituania) podrían cubrir al menos las necesidades mínimas de inversión social y ecológica. Para que todos los Estados miembros pudieran satisfacer sus necesidades de inversión pública social y ecológica, se necesitarían entre 300.000 y 420.000 millones de euros anuales adicionales (entre el 2,9% y el 2,9% del PIB de la UE).

La propuesta legislativa de la Comisión<sup>1</sup> sobre las normas fiscales supuso un paso en la buena dirección, al reconocer al menos los efectos positivos de la inversión pública de calidad sobre la economía y la sostenibilidad de la deuda. Sin embargo, las normas revisadas están obsesionadas con alcanzar unos ratios de deuda y déficit en relación con el PIB sin fundamento económico<sup>2</sup>, y relegan las reformas y las inversiones a un segundo plano. No dan prioridad a los acuciantes retos sociales, climáticos, demográficos y de empleo en un contexto de crecientes disparidades sociales, aceleración del cambio climático, tensiones geopolíticas en las fronteras de Europa y envejecimiento de la población. Para hacer frente a estos retos es necesario aumentar la inversión pública a fin de colmar los considerables déficits de inversión.

Las normas fiscales de la UE son restricciones del gasto público destinadas a garantizar la sostenibilidad de la deuda. Se basan en los criterios de Maastricht, que exigen a los gobiernos mantener el déficit presupuestario y la deuda pública por debajo del 3% y el 60% del PIB, respectivamente. Las nuevas normas fiscales fueron propuestas por la Comisión en abril de 2023 y negociadas por el Consejo y el Parlamento, con votaciones finales previstas para abril de 2024. Aunque el objetivo era simplificar las normas y permitir cierta flexibilidad a los gobiernos para aumentar la deuda destinada a inversiones públicas para hacer crecer la economía y mejorar así la sostenibilidad de la deuda, el compromiso final incluye una serie de estrictos requisitos numéricos de reducción de la deuda y del déficit, que limitan la flexibilidad de los países para utilizar las inversiones públicas para salir de la deuda. Estas normas obligarán a los países a seguir unas sendas de referencia específicas que obligarán a muchos países a realizar recortes presupuestarios. El FMI<sup>3</sup> considera ahora que, por término medio, este tipo de consolidación fiscal no reduce la deuda en relación con el PIB y, en cambio, aumenta la deuda total. Como se demostrará en este documento, restringir innecesariamente el endeudamiento para inversiones públicas de calidad puede perjudicar a la economía y socavar la sostenibilidad de la deuda.

La mano de obra que impulsa los servicios y bienes esenciales de Europa necesita las herramientas necesarias para prestarlos. Sin embargo, en los últimos años, estos trabajadores se han enfrentado a infraestructuras, equipos y formación<sup>4</sup> inadecuados, así como a una escasez crónica de personal<sup>5</sup>. Un planteamiento reactivo que siga sin invertir lo suficiente significa que las infraestructuras seguirán deteriorándose, que se renunciará a la mejora de las cualificaciones, crucial para garantizar que Europa siga por la senda de la alta productividad y el alto valor añadido, y que se perderá el momento de realizar inversiones cruciales para lograr la neutralidad climática. Esto conduciría a un empeoramiento de los servicios públicos y a un aumento de los costes de renovación o sustitución de las infraestructuras, además de aumentar la vulnerabilidad de Europa frente a las amenazas climáticas, sociales, económicas y geopolíticas.

Además, estamos asistiendo a un aumento de las protestas contra los efectos distributivos desiguales de la acción climática actual, en la que la carga recae desproporcionadamente sobre la gente corriente mientras que los extremadamente ricos no están contribuyendo en una parte justa<sup>6</sup>. Una transición justa requiere que los gobiernos apoyen a la gente corriente. Esto significa apoyar a las comunidades trabajadoras en primera línea de la transición. Sólo salvaguardando su capacidad para estimular la creación y el mantenimiento de empleos de calidad podrá Europa anticipar y gestionar el cambio, evitando al mismo tiempo que se agraven las desigualdades. Las infraestructuras básicas, como las redes de energía y de transporte, de las que dependen la industria, los hogares y la transición climática, requieren inversiones iniciales extremadamente elevadas. Éstas sólo pueden absorberse mediante la flexibilidad fiscal unida a una fiscalidad progresiva que garantice que los más ricos paguen la parte que les corresponde.

Las primeras repercusiones de las normas fiscales ya son evidentes. Francia, por ejemplo, ha anunciado una reducción de 1.400 millones de euros en su presupuesto para la transición ecológica<sup>7</sup>, recortando las



inversiones en renovaciones energéticamente eficientes de viviendas, una medida que, en última instancia, podría requerir un mayor gasto público en el futuro<sup>8</sup> (por ejemplo, mayores costes de adaptación al clima o subvenciones energéticas para familias con bajos ingresos). El Gobierno finlandés ha anunciado un catálogo de recortes sociales<sup>9</sup> y ha adoptado un discurso de austeridad. Por su parte, Alemania ha realizado importantes recortes presupuestarios<sup>10</sup>, incluidos recortes a las inversiones verdes, que el instituto de investigación Ifo ha demostrado que tendrían un efecto perjudicial sobre el crecimiento económico<sup>11</sup> (y, por tanto, también sobre la sostenibilidad de la deuda).

Este documento evaluará las nuevas normas fiscales de la UE en relación con las lagunas en materia de inversión social y ecológica para demostrar que las nuevas normas son insuficientes para cumplir los objetivos sociales y medioambientales de la UE. Explicará por qué la falta de inversión social y ecológica empobrecerá a Europa y dañará el tejido social, la capacidad productiva y la capacidad de inversión de la UE para lograr una economía más fuerte y resistente. Por último, se expondrán soluciones políticas, como seguir negociando normas fiscales, una fiscalidad progresiva y la creación de un fondo de inversión a largo plazo.

## La importancia de la inversión pública para cubrir las necesidades de inversiones sociales y ecológicas

Aunque la financiación privada adecuadamente regulada tiene un papel que desempeñar, en las últimas décadas ha demostrado ser en gran medida insuficiente para colmar las lagunas del gasto social y ecológico, como demuestra el hecho de que los mercados privados no hayan colmado las grandes lagunas que se esbozan en la Figura 1.

Además, los servicios públicos se han ido privatizando cada vez más, ya sea mediante la externalización de la prestación de servicios por parte de los gobiernos<sup>12</sup> o mediante la venta explícita de activos públicos<sup>13</sup>. Esta privatización ha llevado a una menor calidad de los servicios públicos<sup>14</sup>, lo que ha ampliado la necesidad de inversiones públicas para mejorar la calidad. Es probable que esta privatización se viera alentada por medidas de ahorro a corto plazo en una época de austeridad<sup>15</sup>, pero en realidad ahora está causando costes a largo plazo.

Las asociaciones público-privadas<sup>16</sup> han sido otra forma en que los mercados privados han influido en servicios que antes eran públicos. No han logrado ofrecer una buena relación calidad-precio, costando más que los préstamos públicos y, en última instancia, dejando que el sector público se haga cargo de los costes<sup>17</sup>, a pesar de que los beneficios caen en manos privadas<sup>18</sup>. Esto ha aumentado los costes para los usuarios de los servicios públicos. Esto ha incrementado los costes para los usuarios de los servicios<sup>19</sup> y fomenta las intervenciones allí donde la infraestructura sería rentable en lugar de donde es necesaria<sup>20</sup>.



La crisis del coste de la vida ha demostrado que los poderes públicos deben desempeñar un papel más importante para dirigir nuestra economía y aplicar políticas que hagan nuestra vida más asequible. La "fosilinflación"<sup>21</sup>, en la que los precios de los combustibles fósiles suben debido a un aumento de la demanda o a limitaciones de la oferta que provocan inflación, y la "inflación de los vendedores"<sup>22</sup>, en la que las grandes empresas tienen poder para subir los precios debido a una competencia limitada o a una demanda elevada, han demostrado las oportunidades que tienen los gobiernos para intervenir en la energía verde y desafiar el poder del mercado.

Invertir en educación, sanidad, cuidados de larga duración y atención a la infancia produce numerosos beneficios para la sociedad en general, que van mucho más allá de los beneficiarios inmediatos de estos servicios. Estas inversiones sientan las bases de una sociedad más sana, productiva y equitativa, contribuyendo en última instancia al crecimiento económico general y a la estabilidad. Cuando los gobiernos asignan fondos para mejorar la educación, por ejemplo, no sólo mejoran los resultados individuales del aprendizaje, sino que también impulsan la productividad de la mano de obra y la innovación<sup>23</sup>. Una población bien formada está mejor preparada para adaptarse a las cambiantes demandas económicas, impulsando el crecimiento económico y la competitividad a largo plazo. Del mismo modo, las inversiones en atención sanitaria conducen a poblaciones más sanas y a una mayor participación de la mano de obra. Además, la inversión pública en servicios de cuidados de larga duración ayuda a las poblaciones que envejecen y a las personas con discapacidad, permitiéndoles llevar una vida independiente y digna. Además, las inversiones en guarderías apoyan a las familias trabajadoras permitiendo a los padres participar en el mercado laboral, promoviendo la igualdad de género y fomentando el desarrollo de la primera infancia, que sienta las bases para el futuro éxito académico y social<sup>24</sup>.

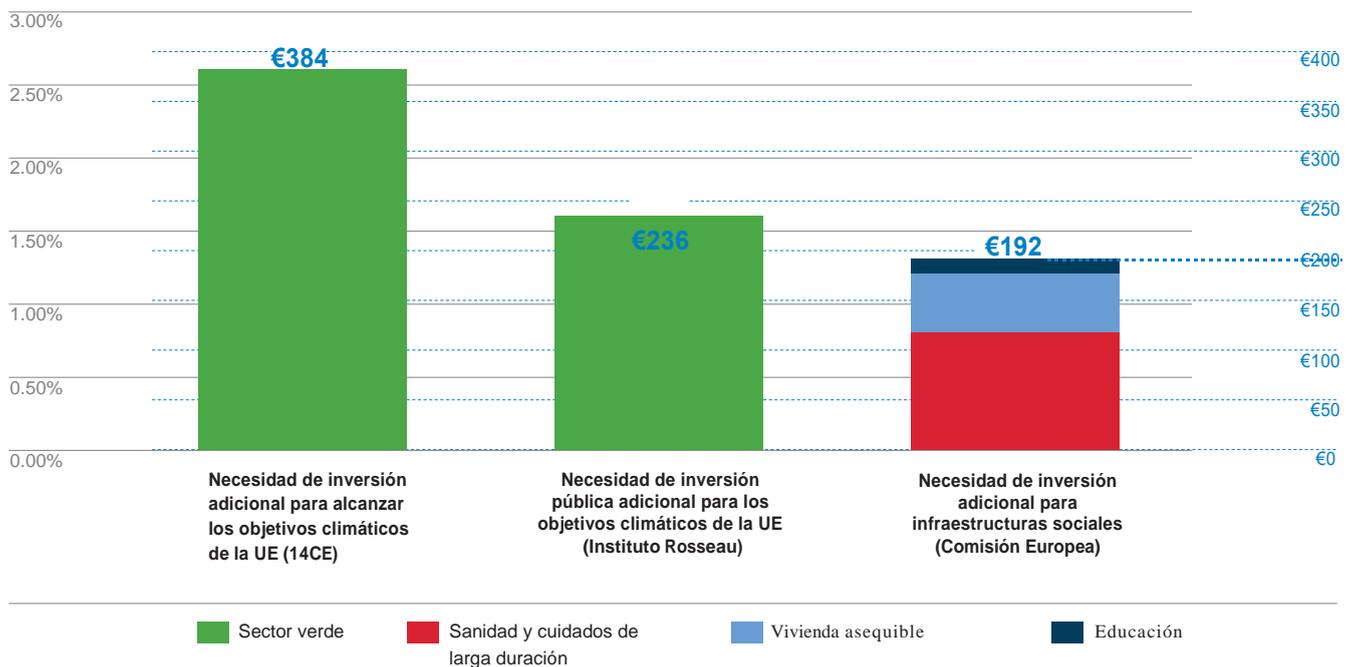
El discurso actual en torno a la transición energética asume que, una vez que las fuentes de energía renovables sean más baratas que los combustibles fósiles, el cambio será rápido. Sin embargo, aunque las energías renovables puedan competir con los combustibles fósiles en precio, el factor crucial para los inversores privados que influye en sus decisiones es el beneficio esperado y es poco probable que las energías renovables proporcionen beneficios comparables a los productores, ya que los márgenes de beneficio son mucho más bajos en comparación con los combustibles fósiles<sup>25</sup>. Para superar este problema, los gobiernos tienen que aplicar políticas industriales ecológicas que favorezcan a los sectores verdes o de producción neta cero, al tiempo que apoyan a los trabajadores de los sectores muy contaminantes para que realicen la transición a empleos diferentes. La forma más eficaz de hacerlo es utilizar fondos públicos condicionados socialmente<sup>26</sup> para las políticas industriales, y una contratación pública que incentive los sectores vitales de transición y cero emisiones netas (por ejemplo, las energías renovables, la eficiencia energética y el transporte público), al tiempo que se eliminan progresivamente las ayudas públicas a los combustibles fósiles y otros sectores contaminantes.

El gráfico 1 muestra las brechas estimadas de inversión social y ecológica en la UE. La

primera barra muestra la inversión pública y privada adicional estimada necesaria para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo, que requiere 406.000 millones de euros (2,6% del PIB de la UE)<sup>27</sup>. La segunda columna muestra únicamente la inversión pública adicional necesaria para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo, que requiere 260 000 millones de euros (1,6 % del PIB de la UE)<sup>28</sup>. Estas estimaciones tienen en cuenta las necesidades de inversión en una serie de ámbitos, como la ecologización de la red eléctrica, la protección de los ecosistemas y la prevención de la contaminación<sup>29</sup>. La tercera columna muestra la inversión pública y privada adicional necesaria para la infraestructura social, que requiere 192.000 millones de euros (1,3% del PIB de la UE)<sup>30</sup>. Esto incluye la necesidad de edificios escolares y hospitalarios, viviendas asequibles, equipamiento médico, infraestructuras de TIC, instalaciones de educación y formación, programas de investigación y desarrollo y eficiencia energética de los edificios públicos. Obsérvese que no se incluyen los costes salariales o de servicios públicos, ya que se considerarían gasto corriente cotidiano y no inversión

**GRÁFICO 1.** La UE tiene grandes carencias de inversión para cumplir sus objetivos ecológicos y sociales

Déficit de inversión anual (% del PIB, miles de millones de euros en 2021 PIB))



**Nota:** Las cifras en euros del gráfico difieren de las del texto, ajustadas al PIB de 2021



La financiación de la inversión pública social y ecológica mediante empréstitos presenta varias ventajas, en particular para las iniciativas destinadas a estimular el desarrollo económico y el desarrollo de infraestructuras. El endeudamiento permite a los gobiernos distribuir el coste de las inversiones a lo largo del tiempo, evitando así implicaciones inmediatas sobre las decisiones fiscales y de gasto. Este enfoque permite que los proyectos cruciales sigan adelante sin necesidad de subidas inmediatas de impuestos o recortes en los servicios existentes. Cuando se invierte en activos a largo plazo que generan beneficios a lo largo de un periodo prolongado, como la mejora de la educación, las infraestructuras de transporte o los proyectos de energías renovables, el endeudamiento puede amortizarse. Esto se debe a que algunas inversiones tienen un efecto multiplicador desmesurado, es decir, el cambio final en la producción económica es mayor que la cantidad inicial invertida. Se ha demostrado que esto es especialmente cierto en el caso de las inversiones ecológicas<sup>31</sup>, pero también en el de las inversiones en servicios públicos clave como la atención a la infancia (véase el blog de la NEF sobre la inversión en educación infantil se amortiza sola<sup>32</sup>). Centrar el endeudamiento en áreas que generen crecimiento económico puede ayudar a que la deuda de un país sea más sostenible<sup>33</sup>.

Por otro lado, el gasto social actual, como las pensiones y la seguridad social, debería financiarse a través de una fiscalidad progresiva. La fiscalidad progresiva garantiza que las personas con mayores ingresos contribuyan proporcionalmente más a la financiación de los programas sociales, redistribuyendo así los ingresos, reduciendo la desigualdad y promoviendo la cohesión social. Además, la fiscalidad progresiva puede adaptarse para dirigirse a las personas o empresas más ricas, que pueden tener una mayor capacidad para contribuir a satisfacer las necesidades sociales. Sin embargo, unas normas fiscales demasiado restrictivas implican que los gobiernos

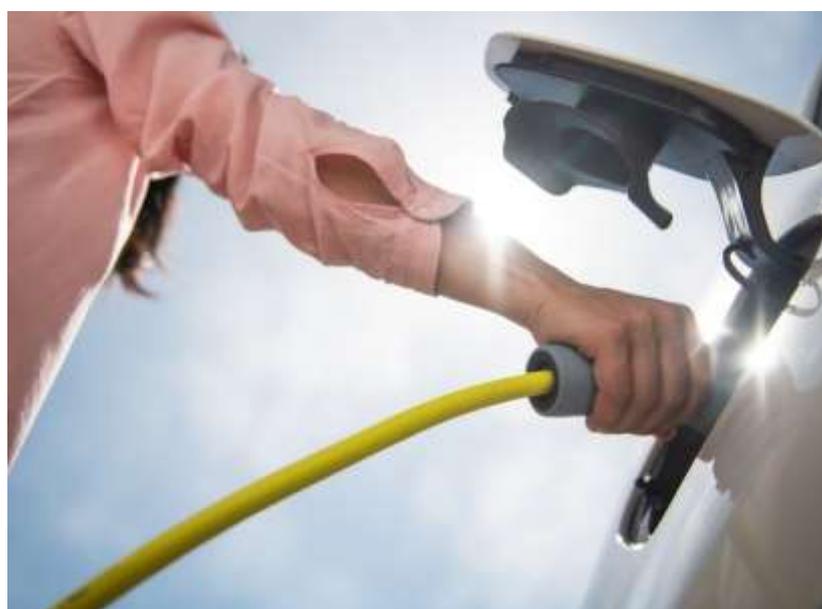
racionalicen los recortes del gasto social actual<sup>34</sup>, para permitir las inversiones públicas. Se trata de una falsa dicotomía.

Las inversiones públicas en bases sociales sólidas, como la mejora de las escuelas, los centros sanitarios y los servicios para la juventud, no sólo son fundamentales para el bienestar individual, sino también para la fortaleza y prosperidad generales de nuestras economías y sociedades. Una educación y una sanidad de calidad contribuyen directamente a una mano de obra cualificada y sana, lo que aumenta la productividad y la innovación.

Las inversiones públicas en la transición también son esenciales para acelerar, hacer más accesible y contribuir a reducir el coste de la vida. Por ejemplo, las inversiones para renovar las viviendas sociales, o para permitir que la gente reciba subvenciones para la energía solar en los tejados, reducirían significativamente el coste de la vida. Del mismo modo, las inversiones en transporte público de buena calidad mejoran el acceso al trabajo y reducen las emisiones de carbono. Por el contrario, una transición sin suficientes inversiones públicas ecológicas y centrada principalmente en la tarificación del carbono (por ejemplo, el Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión para automóviles y calefacción), supondrá mayores costes e impactos para la gran mayoría de los hogares<sup>35</sup>. Mientras tanto, los hogares más ricos disponen de capital privado para invertir en vehículos eléctricos, energías renovables, eficiencia energética y bombas de calor, y así evitar el precio del carbono, o son más capaces de vivir con el mayor coste y seguir contaminando. De hecho, la Agencia Alemana de Medio Ambiente advirtió recientemente de que las actuales medidas climáticas corren el riesgo de provocar malestar social si no se apoya suficientemente a los hogares<sup>36</sup>. Las inversiones públicas verdes son un ingrediente indispensable para una transición socialmente justa.

Desde la crisis financiera mundial se han producido importantes divergencias en los resultados económicos entre el Norte y el Sur, en parte debido a los recortes de austeridad<sup>37</sup>. Es probable que esto aumente, ya que algunos Estados miembros han gastado muchas más ayudas estatales que otros y es probable que sigan haciéndolo, ya que las normas fiscales exigen una mayor consolidación fiscal a algunos Estados miembros en comparación con otros. El diseño de las políticas económicas de la UE, incluida la política fiscal y las políticas industriales, requiere una atención explícita para que todos los Estados miembros puedan utilizar las inversiones públicas hacia los objetivos políticos acordados, sin tener que llevar a cabo innecesariamente medidas de austeridad.

Además, no aumentar las inversiones públicas en política industrial puede impedir a la UE contrarrestar la "tendencia muy preocupante"<sup>38</sup> de desindustrialización en la UE<sup>39</sup>. Permitir que continúe la desindustrialización tendría efectos negativos significativos en la fortaleza y resistencia económica de Europa, y también crearía luchas económicas para los individuos y comunidades afectados<sup>40,41</sup>. Ante la probabilidad de que las tensiones geopolíticas y las perturbaciones comerciales relacionadas con el clima aumenten en los próximos años, Europa necesita desesperadamente una estrategia de inversión que permita a la UE reforzar su base manufacturera y aumentar la fabricación de tecnologías clave, como los paneles solares y las bombas de calor. La financiación pública de la industria debe estar siempre vinculada a condiciones sociales, como el respeto de la negociación colectiva y la mejora de la cualificación de la mano de obra. También podrían tenerse en cuenta las condiciones medioambientales, como la descarbonización de las cadenas de valor, el abastecimiento sostenible de recursos y el incentivo al desarrollo de productos eficientes desde el punto de vista energético y material (por ejemplo, vehículos más ligeros).



El gobierno federal estadounidense ha optado por las inversiones públicas para estimular el sector de la fabricación ecológica y de alta tecnología<sup>42</sup>. Según el [Departamento del Tesoro de EE.UU.](#)<sup>43</sup>, esto se ha traducido en un aumento significativo de la construcción total de plantas de fabricación, mientras que el gasto real en fabricación de ordenadores, electrónica y electricidad -áreas prioritarias para la inversión pública a través de iniciativas como CHIPS y la Ley de Ciencia y la Ley de Reducción de la Inflación- casi se ha cuadruplicado en el último año. Según Deutsche Bank<sup>44</sup>, en Estados Unidos se ha iniciado la construcción de 18 nuevas instalaciones de semiconductores entre 2021 y 2023. Acumulativamente, el gasto en construcción en el sector manufacturero se encuentra actualmente en su nivel más alto de las últimas seis décadas<sup>45</sup>.

La experiencia de EE.UU. es una prueba más de que, junto con las condicionalidades sociales, la inversión pública es crucial para lograr una política industrial que proteja y cree puestos de trabajo de calidad hoy y en el futuro. La UE se enfrenta actualmente a una gran escasez de mano de obra<sup>46</sup>, pero su planteamiento de política industrial no incluye hasta ahora condiciones sociales. La Ley de Reducción de la Inflación obliga a las empresas que soliciten créditos fiscales a contratar aprendices para al menos el 15% del trabajo, apoyar la sindicación, apoyar el pago de salarios justos y establecerse en regiones desfavorecidas o en las que antes se utilizaban muchos fósiles.

## ¿Puede la UE hacer frente a sus carencias de inversión verde y social?

Como ya se ha dicho, la UE necesita desesperadamente un aumento de la inversión pública social y ecológica. Según la Comisión<sup>47</sup>, la UE tiene actualmente un déficit de inversión social (por ejemplo, en infraestructuras de educación, sanidad y vivienda asequible) de 192 000 millones de euros (1,3 % del PIB de la UE en 2021). El Instituto de Economía del Clima (I4CE) ha calculado que la UE solo está cubriendo la mitad de sus necesidades de inversión climática<sup>48</sup> para alcanzar los objetivos de la UE, lo que deja un déficit de inversión de 406 000 millones de euros (2,6 % del PIB de la UE en 2022). Nótese que ambas cifras son déficits de inversión, no incluyen el gasto cotidiano.

Subsanar el déficit de financiación de la inversión ecológica y social no es responsabilidad exclusiva de los gobiernos, ya que el déficit incluye también la inversión del sector privado. Sin embargo, la inversión pública es esencial para ofrecer infraestructuras sociales, servicios públicos y una transición justa, así como una política industrial específica y condicionada

### Metodología

Por lo que respecta a las necesidades de inversión en infraestructura social, existen pocos informes que analicen el reparto público y privado de las inversiones sociales y ninguno, que sepamos, que intente calcular las necesidades por país. Por lo tanto, utilizamos una serie de estimaciones encontradas en la literatura y construimos nuestra propia metodología para identificar las necesidades de inversión pública social por país. En 2018, cuando la Comisión Europea calculó por primera vez su brecha de inversión social<sup>49</sup>, señaló que el sector público financia "en promedio alrededor del 90% [de la infraestructura social] y varía según los sectores." Por lo tanto, utilizamos esto como un límite superior para la cuota de inversión pública esperada de las brechas de inversión en infraestructura social. Esto implicaría que algo más de 170.000 millones de euros de los 192.000 millones de déficit deberían ser financiados por los gobiernos.



Para obtener una estimación del límite inferior, nos fijamos en las estimaciones de la parte pública por sector. Los 192.000 millones de euros de la Comisión Europea se componen de 15.000 millones de inversión en educación, 120.000 millones de inversión en sanidad y cuidados de larga duración y 57.000 millones de inversión en vivienda asequible (como se ve en el gráfico 2). El Banco Europeo de Inversiones ha calculado<sup>50</sup> la trayectoria de la parte pública y privada de la inversión en los sectores de la sanidad y la educación. Hasta 2040, el porcentaje de inversión pública en sanidad disminuirá, y los gobiernos solo serán responsables del 40% de la inversión total en 2040, frente al 65% en 2018. Sin embargo, en educación, la proporción pública se mantendrá estable en torno al 80%. Además, un documento del Observatorio Europeo de la Vivienda Social<sup>51</sup> muestra que la vivienda asequible suele cubrir el 35% de sus costes de financiación mediante fondos públicos. Por lo tanto, junto con las estimaciones del Banco Europeo de Inversiones, esto nos da un límite inferior para la cuota pública, que asciende a algo menos de 80.000 millones de euros financiados con fondos públicos del déficit total de 192.000 millones de euros.



Por lo tanto, nuestro modelo examina la asequibilidad de un paquete a escala de la UE que cueste entre 80.000 y 170.000 millones de euros al año. Esta gama de estimaciones es útil, ya que puede ayudar a tener en cuenta el hecho de que para colmar las lagunas de inversión puede ser necesaria una mayor proporción de inversión procedente de los gobiernos y permite tener en cuenta los diferentes enfoques adoptados por los gobiernos para satisfacer las necesidades de inversión social.

Además, para desglosar los costes por países empleamos dos métodos diferentes para identificar las necesidades de inversión social. En primer lugar, examinamos toda la inversión pública (formación bruta de capital fijo) en los tres sectores pertinentes: sanidad, educación y vivienda. A partir de los déficits de inversión calculados por la Comisión de la UE, calculamos para cada país un déficit que lo situaría en la media hipotética de la UE tras la inversión. Las necesidades de gasto por país son proporcionales a estos déficits de inversión. Por ejemplo, si un país tiene una brecha de inversión social equivalente a la mitad de la media de la UE, debería recibir la mitad del gasto medio, mientras que si tiene una brecha del doble de tamaño debería recibir el doble del gasto medio. Si un país tiene un déficit de inversión negativo, suponemos que no necesita inversiones adicionales.

Sin embargo, los bajos niveles de inversión pueden reflejar un gasto históricamente elevado, por lo que, como segundo método, también nos fijamos en las métricas que miden la necesidad social para asegurarnos de que los datos lo reflejan. En el caso de la salud, nos fijamos en la esperanza de vida con buena salud (HLYE) por país; en el de la educación, en la población de entre 15 y 24 años que no trabaja,

no estudia ni recibe formación (NEET); y en el de la vivienda, en la tasa de sobrecarga del coste de la vivienda, es decir, el porcentaje de personas que pagan más del 40% de sus ingresos por la vivienda. Para los ninis y la sobrecarga del coste de la vivienda, ajustamos la necesidad de un país proporcionalmente a la media de la UE, es decir, si un país tiene el doble de ninis que la media de la UE, debería recibir el doble de la ayuda media y, del mismo modo, la mitad de la ayuda media para la sobrecarga del coste de la vivienda si un país está a la mitad de la media de la UE. En el caso de HYLE, suponemos que todos los países se fijan como objetivo el mayor HYLE registrado en la UE más dos años, ya que aumentar en dos años la esperanza de vida con buena salud ha sido un objetivo de la UE en el pasado<sup>52</sup> y un objetivo común para todos los países puede ayudar a reducir las desigualdades sanitarias.

Tras calcular la diferencia entre este objetivo y la media de un país, la comparamos con la diferencia de la media de la UE. Si la diferencia de HLYE de un país es el doble de la media de la UE, deberá recibir el doble de la ayuda media y la mitad si es la mitad de la media.

Utilizamos métricas basadas tanto en la inversión como en las necesidades, ya que entendemos que los determinantes de las diferencias entre países no son puramente económicos y no pueden resolverse simplemente gastando más. En conjunto, esto nos da una serie de estimaciones que ofrecen un ejemplo ilustrativo de cómo podría repartirse el gasto social en la UE. En realidad, ese gasto se repartiría mediante un proceso mucho más intrincado, pero esperamos que al incluir una serie de hipótesis nuestros resultados puedan captarlo en cierta medida.

En cuanto al gasto verde, un reciente análisis del Instituto Rousseau<sup>53</sup> sugiere que la UE necesita al menos un aumento del 1,6% del PIB de las inversiones públicas para cumplir sus obligaciones climáticas. En comparación con las cifras de I4CE, esto sugiere una participación pública de alrededor del 60% para colmar estas lagunas de inversión verde.

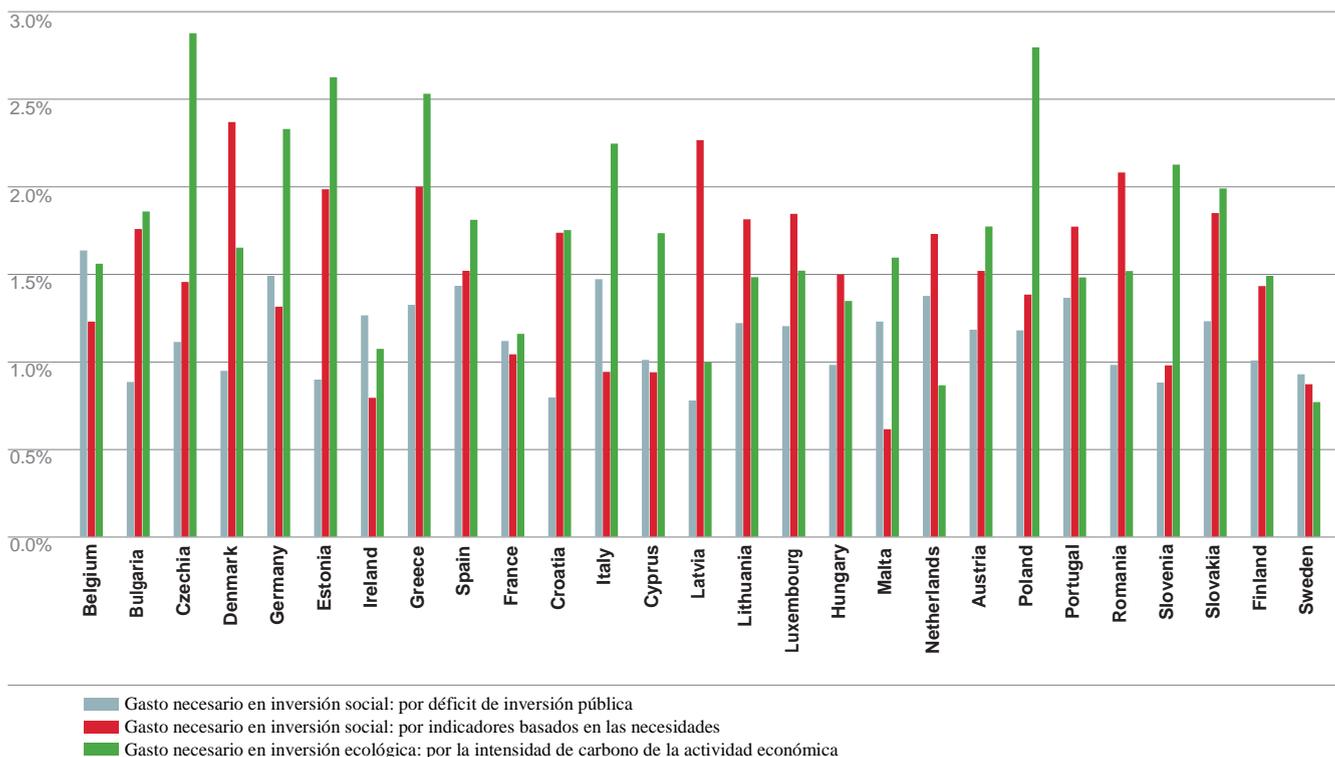
Para comprender las necesidades de inversión verde por país, podemos seguir la metodología de Paul van den Noord (2023)<sup>54</sup>, según la cual las necesidades de inversión de los países se calculan en función de la intensidad relativa de carbono de su actividad económica, medida por las emisiones de CO2 por euro de PIB. Por ejemplo, si un país tiene el nivel medio de intensidad de carbono de la UE, debería comprometer el 1,6% de su PIB, que es proporcional al nivel medio de inversión necesario en toda la UE. Por el contrario, un país con la mitad de la intensidad de carbono de la media de la UE

tendría que comprometer la mitad y un país con el doble de intensidad tendría que comprometer el doble.

El gráfico 2 muestra cómo podrían dividirse por países estas necesidades de inversión social y ecológica. En el caso de la inversión social, los países que necesitan más del 1,3% del PIB tienen déficits de inversión pública en sectores sociales superiores a la media o necesidades sociales superiores a la media según los indicadores anteriores. Del mismo modo, para la inversión pública verde, los países con necesidades de inversión superiores al 1,6% tienen una intensidad de carbono de su actividad económica superior a la media.

**GRÁFICO 2.** Los países necesitan distintos niveles de gasto para hacer frente a las carencias de inversión social y ecológica

**Necesidades de inversión social y ecológica por país (% PIB)**



**Nota:** Análisis del FNE de los déficits de inversión de Eurostat y la Comisión Europea.

Tras ajustar la inversión social a los escenarios de alta y baja participación pública explicados anteriormente, ahora podemos comparar las brechas de inversión pública social y verde con el espacio fiscal del que dispondrán los gobiernos.

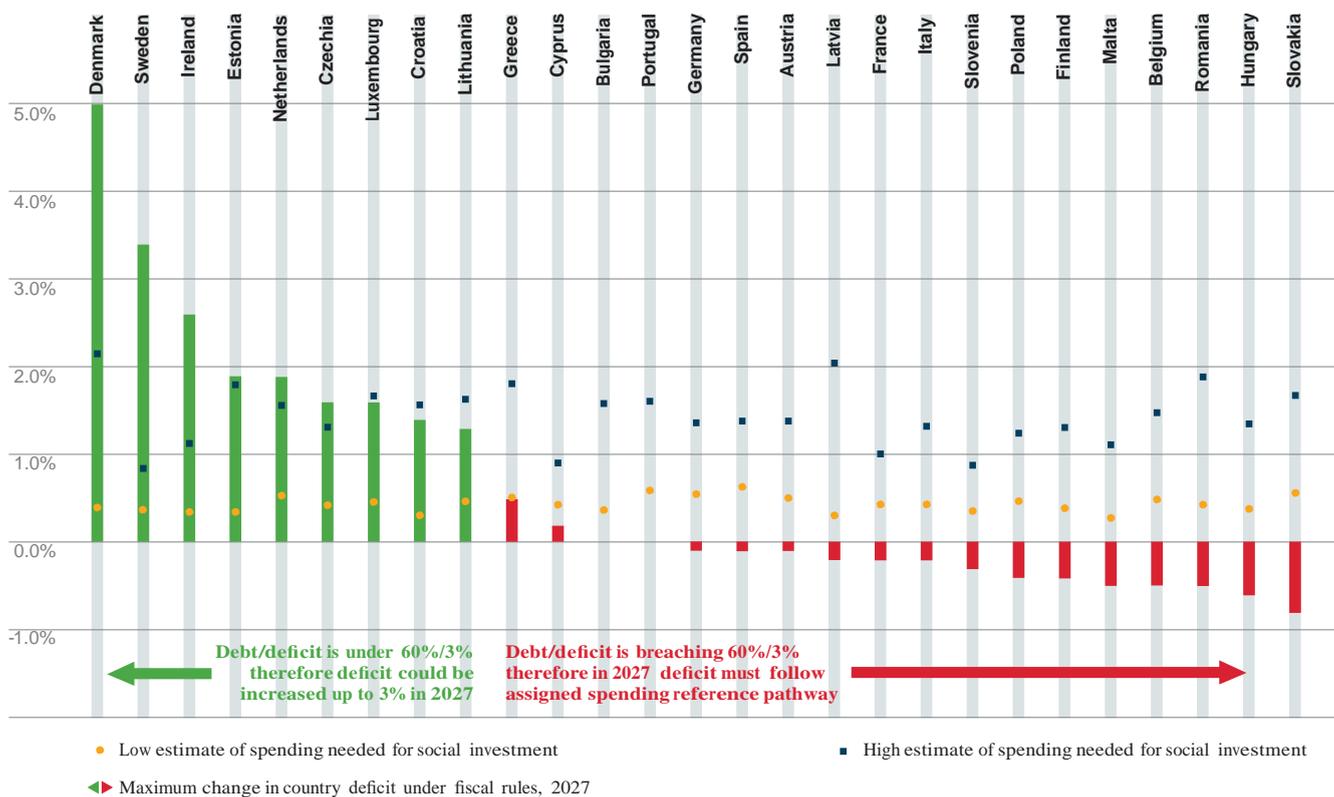
### Resultados

Utilizando las proyecciones de la Comisión para los déficits según la propuesta de normas fiscales del Consejo Europeo, vemos que todos los países que incumplen los límites fiscales no podrían cumplir nuestra estimación mínima de gasto social, como se muestra en la figura 3. Esto se debe a que la mayoría estarían en sendas de referencia que requieren recortes en sus déficits (excepto Grecia y Chipre, cuyas sendas de referencia permiten aumentar los déficits, pero con la condición de que la relación deuda/PIB siga disminuyendo). Esto se debe a que la mayoría se encontraría en vías de referencia que exigen recortes de sus déficits (salvo Grecia y Chipre, cuyas vías de referencia permiten aumentar los déficits, pero con la condición de que la deuda en relación con el PIB siga disminuyendo) y, por lo tanto, dichas inversiones tendrían que financiarse mediante nuevos recortes o un aumento de los impuestos.

Curiosamente, todos los países no afectados por el límite del 60% de deuda y el 3% de déficit podrían aumentar sus déficits y permitirse nuestra estimación de la inversión social mínima requerida, si sólo gastaran en esto su espacio fiscal adicional conforme a las normas de la UE. Sin embargo, Luxemburgo, Croacia y Lituania no podrían hacer frente a las inversiones sociales si éstas se evaluaran según nuestra estimación más elevada. Además, si bien mostramos que estos déficits de inversión son asequibles con arreglo a las normas fiscales de la UE, esto no significa necesariamente que todos los países los cumplirían: pueden gastar en otras prioridades, no considerar importantes estos déficits de inversión o tener sus propias normas fiscales además de las de la UE que limitan aún más el gasto.

### GRÁFICO 3. Sólo los países que no incumplen las normas fiscales podrían cubrir los déficits de inversión social

Aumento de los déficits permitidos según las normas fiscales en 2027 en comparación con las brechas de inversión social (% del PIB)



Nota: Análisis de datos de Eurostat y la Comisión Europea realizado por NEF

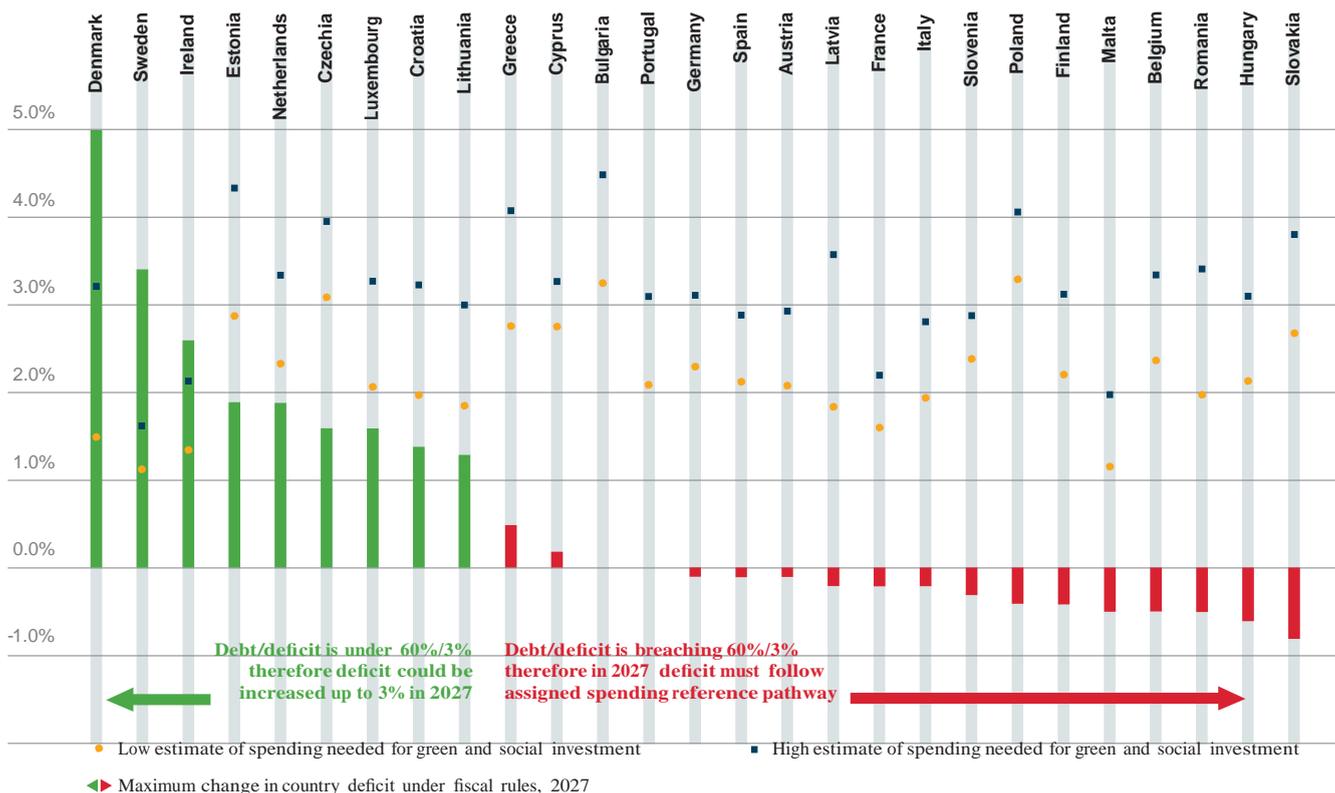
Además, aunque los Estados miembros consideren que es importante abordar los déficits de inversión, hasta ahora no hemos tenido en cuenta los déficits de inversión ecológica, por lo que es necesario añadir la inversión ecológica para ver el panorama completo. Si se añaden los déficits de inversión pública ecológica, sólo tres países (Dinamarca, Suecia e Irlanda) pueden permitirse cumplir los objetivos sociales y climáticos con arreglo a las normas fiscales de la UE, como se muestra en el gráfico 4. Estos resultados muestran cómo incluso la mayoría de los países de la UE no pueden cumplir los objetivos sociales y climáticos con arreglo a las normas fiscales de la UE. Estos resultados muestran cómo incluso la mayoría de los países que actualmente cumplen las normas fiscales de la UE no podrán permitirse cubrir sus déficits de inversión social y ecológica, ya que se verán limitados por la norma del 3% de déficit.

Las normas fiscales de la UE limitarán los presupuestos de los países y obligarán a las políticas sociales, ecológicas y de otro tipo a competir políticamente por fondos adicionales. Sin embargo, las inversiones ecológicas y sociales no tienen por qué competir, y hay ejemplos de medidas que crean empleo y son a la vez sociales y ecológicas, como la mejora de la eficiencia energética de escuelas y hospitales y la rehabilitación

de viviendas sociales. El Fondo de Recuperación y Recuperación (FRR)<sup>55</sup> de la UE es un ejemplo de ello. El FRR recaudó fondos en los mercados de capitales en nombre de toda la UE tras la pandemia. El dinero recaudado se utiliza para conceder subvenciones y préstamos a los Estados miembros de la UE con el fin de facilitar la transición ecológica y digital y cumplir los objetivos de cohesión de la política social. Algunos de estos proyectos han sido evaluados para satisfacer conjuntamente necesidades ecológicas y sociales. Sin embargo, según el análisis de Bruegel sobre el FRR<sup>56</sup>, se consideró que sólo el 2,5% de las inversiones sociales y ecológicas realizadas coincidían en la consecución de objetivos tanto medioambientales como sociales. Centrándose en inversiones que sean tanto sociales como ecológicas, los países pueden reducir sus brechas sociales y ecológicas combinadas.

**GRÁFICO 4.** Sólo tres países podrían cubrir sus déficits de inversión ecológica y social con las nuevas normas fiscales de la UE

Aumento de los déficits permitidos por las normas fiscales en 2027 en comparación con las brechas de inversión verde y social (% del PIB.)



Nota: Análisis de datos de Eurostat y la Comisión Europea realizado por NEF

Además, debe concederse a los países más capacidad fiscal para cumplir sus objetivos de inversión social y ecológica. El FRR finalizará a finales de 2026, sin fondos adicionales disponibles en 2027 si no se crea un nuevo mecanismo financiado por la deuda de la UE. Modelizamos el impacto que podría tener la reintroducción de las subvenciones del FRR si los países recibieran en 2027 la subvención media anual durante el periodo 2021-2026. Este escenario daría a los países cierto margen adicional y permitiría a Croacia y Lituania satisfacer nuestra estimación más baja de las necesidades de inversión social y ecológica, como se muestra a continuación en el Gráfico 5. También es importante tener en cuenta que si los países tienen que recortar sus presupuestos al mismo tiempo que reciben subvenciones, entonces los recortes presupuestarios pueden simplemente crear más necesidades de inversión social<sup>57</sup> y verde<sup>58</sup> a largo plazo, como ha ocurrido en el pasado<sup>59</sup>, reduciendo el impacto de las mejoras a largo plazo.

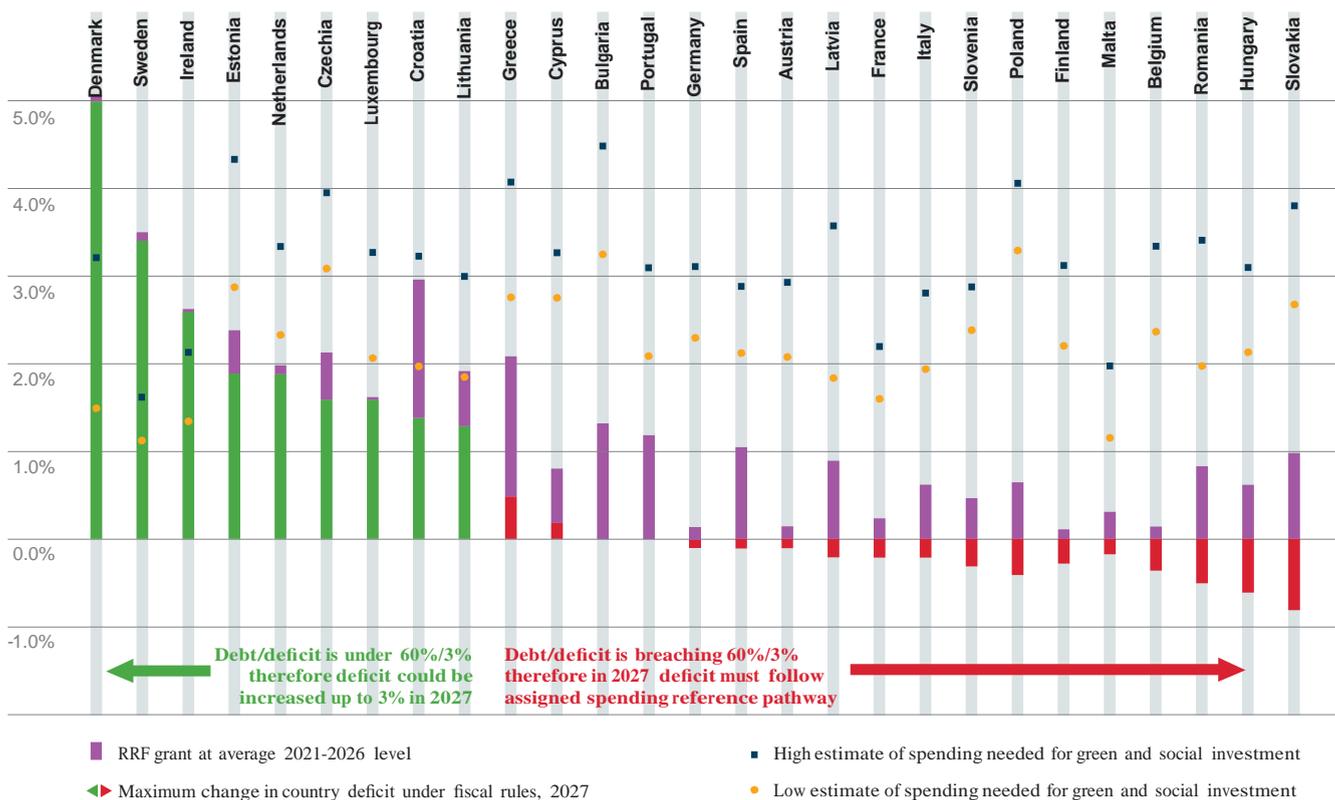
Por lo tanto, el hecho de que sólo cinco países puedan cumplir los objetivos de inversión social y ecológica, incluso si se amplía el FRR, pone de manifiesto la rigidez de las normas fiscales y la incapacidad de la UE para colmar sus lagunas en materia de inversión

social y ecológica en el marco actual. Para hacer frente a estos retos se requerirá ambición política y honestidad en torno a la naturaleza restrictiva de las normas fiscales.

Por lo tanto, los resultados anteriores muestran que, en general, la UE no podrá hacer frente a sus inversiones sociales y ecológicas mediante un aumento del endeudamiento si se atiene a sus normas fiscales sin cambios. Sin embargo, estas normas son decisiones políticas y no fundamentos económicos. Estos retos pueden superarse con otras políticas, pero la UE se estará limitando innecesariamente mientras se atenga a unas normas fiscales que limitan el endeudamiento incluso para las inversiones sociales y ecológicas necesarias. Sobre todo, teniendo en cuenta que muchas de estas inversiones tienen un enorme efecto multiplicador y pueden contribuir significativamente a la sostenibilidad de la deuda.

**GRÁFICO 5.** Aunque se reintrodujera el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, sólo cinco países podrían cubrir los déficits de inversión ecológica y social

Aumento de los déficits permitidos con arreglo a las normas fiscales en 2027 en comparación con las brechas de inversión ecológica y social (% del PIB)



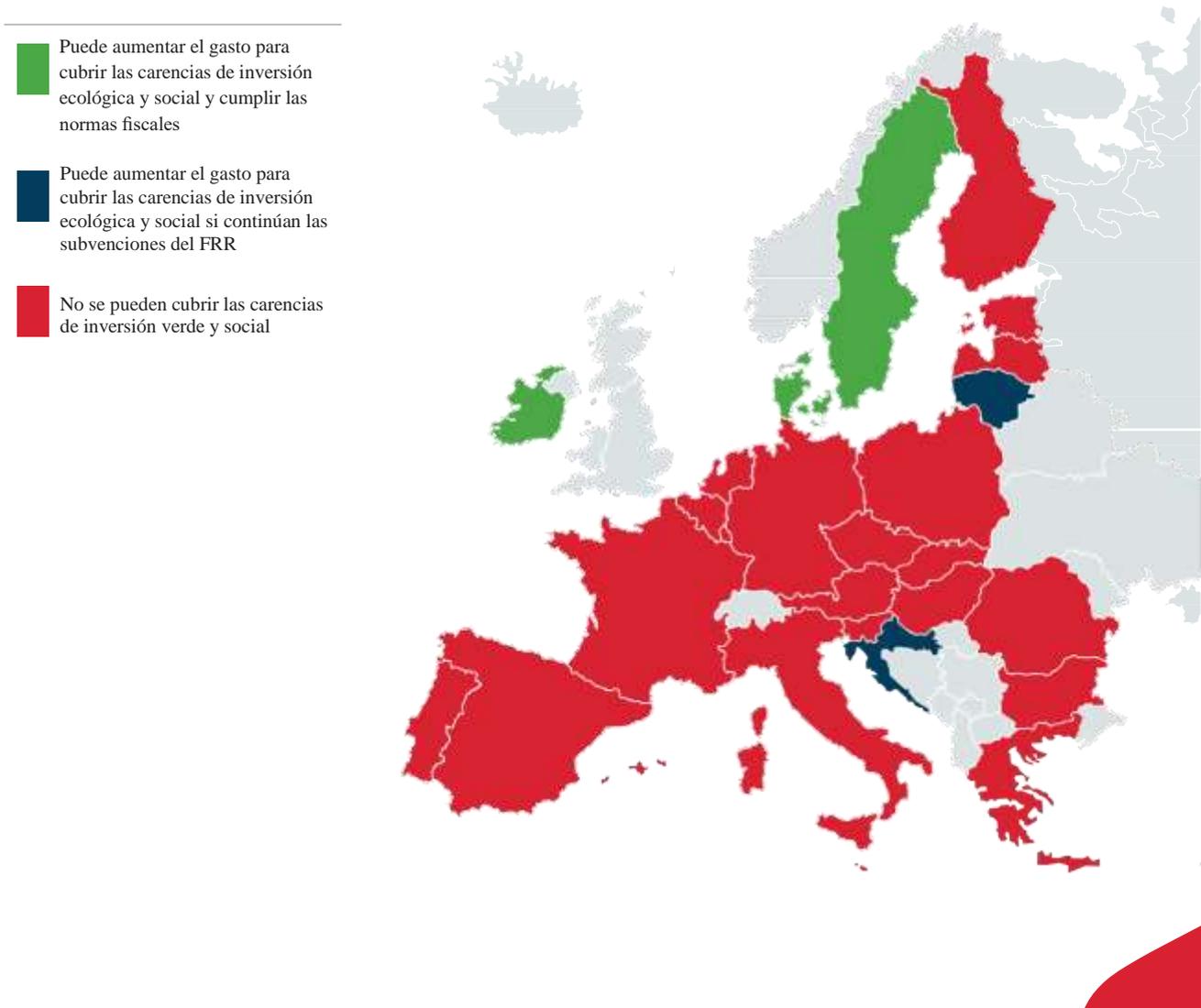
**Nota:** Análisis de datos de Eurostat y la Comisión Europea realizado por NEF

La figura 6 muestra los resultados de nuestro análisis en forma de mapa. Los países coloreados en verde pueden cubrir los déficits de inversión social y verde con las actuales normas fiscales, los países coloreados en naranja podrían cubrir los déficits de inversión verde si se mantuvieran las subvenciones del FRR, y los países coloreados en rojo no podrían cubrir los déficits de inversión social y verde.

Para que todos los Estados miembros cumplieran sus requisitos de financiación adicional, se necesitarían en torno a 300.000-420.000 millones de euros anuales (2,1-2,9% del PIB de la UE), suponiendo que la financiación se asignara

perfectamente para que los países cumplieran nuestras estimaciones calculadas de brecha verde y social. Para garantizar que pueda cubrirse una brecha tan grande, la UE debe plantearse reformas de su marco económico y sus políticas actuales. A continuación analizamos la posibilidad de flexibilizar las normas fiscales, establecer una nueva fiscalidad progresiva y crear un fondo de inversión a largo plazo de la UE para crear más espacio para cubrir estas brechas.

**FIGURA 6.** Mapa de brechas de inversión social y verde en comparación con las normas fiscales y continuación de subvenciones del FRR



## Recomendaciones

Deberían considerarse las siguientes reformas políticas.

### Normas fiscales de la UE

Las normas reformadas se centran en alcanzar ratios arbitrarios de deuda y déficit respecto al PIB, mientras que deberían haber avanzado hacia criterios más eficaces para garantizar la sostenibilidad de la deuda y el déficit, en particular prestando mayor atención a la calidad del gasto público. Las reformas y las inversiones siguen siendo una idea tardía en el texto final. Las normas no constituyen una respuesta adecuada a los retos que tenemos por delante: aceleración del cambio climático, divergencia económica y social, pobreza y desigualdad, cambios fundamentales en el mundo laboral y guerra en las fronteras de la UE. Todos estos retos exigen una profunda transformación de nuestra economía.

El compromiso final supone un retroceso con respecto a la propuesta original de la Comisión, que permitía una mayor flexibilidad, aunque todavía insuficiente, para desencadenar inversiones públicas de calidad, ya que la propuesta permitía más discrecionalidad y no incluía tantos puntos de referencia numéricos. La aplicación de la metodología del análisis de sostenibilidad de la deuda (ASD)<sup>60</sup> requiere importantes ajustes fiscales<sup>61</sup> por parte de los Estados miembros. La inclusión de nuevas salvaguardias numéricas arbitrarias -en particular la denominada salvaguardia de resistencia al déficit, que añade el requisito de que los países que superen los umbrales del 3% de déficit en relación con el PIB o del 60% de deuda en relación con el PIB reduzcan su déficit estructural<sup>62</sup> por debajo del 1,5% del PIB- está endureciendo aún más las restricciones arbitrarias y problemáticas existentes. En conjunto, la combinación de diferentes requisitos conduce a un ajuste fiscal muy heterogéneo y extremadamente exigente para los Estados miembros.

Las salvaguardias numéricas añadidas dan lugar a normas confusas y desiguales para los distintos Estados miembros. Por ejemplo, la salvaguardia de resistencia al déficit impondría obligaciones muy diferentes a los Estados miembros que se encuentran justo por encima de los umbrales del 60% de la deuda en relación con el PIB y del 3% del déficit en relación con el PIB que a los



Estados miembros que se encuentran justo por debajo.

### Fiscalidad progresiva

Las desigualdades en Europa se han acentuado, sobre todo a raíz de la crisis de COVID-19<sup>63</sup>. Los beneficios se han traducido en un aumento de los dividendos<sup>64</sup> y la recompra de acciones<sup>65</sup>, mientras que la inversión no ha colmado las lagunas de la inversión verde y social.

La Unión Europea ha reconocido el imperativo de una revisión socioecológica de nuestras economías<sup>66</sup>. Sin embargo, la financiación de esta transición a través del endeudamiento público se enfrenta a desafíos, como hemos demostrado en este documento. La utilización de instrumentos políticos con efectos distributivos regresivos podría exacerbar las vulnerabilidades entre los más desfavorecidos. La fiscalidad progresiva, incluida la lucha contra el traslado artificial de beneficios al extranjero, el aumento del impuesto de sociedades al 25%, la equiparación de los tipos impositivos de las plusvalías y los dividendos con los del impuesto sobre la renta, un impuesto sobre la riqueza neta de las personas físicas con un patrimonio neto muy elevado y otras formas de fiscalidad regresiva podrían contribuir a reducir la vulnerabilidad de los más desfavorecidos.

El desplazamiento de beneficios se produce cuando las empresas multinacionales reducen su carga fiscal trasladando la ubicación de sus beneficios de países con impuestos elevados a jurisdicciones con impuestos bajos y paraísos fiscales. Los esfuerzos de la Unión Europea por hacer frente al traslado de beneficios y establecer un impuesto de sociedades justo han sufrido reveses, sobre todo con la retirada de propuestas como la Base Imponible Consolidada Común del Impuesto de Sociedades (BICCS). A pesar de las peticiones de medidas contra el traslado de beneficios, el Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT) parece indulgente y permite a las multinacionales seguir trasladando beneficios dentro de la UE<sup>67</sup>. El hecho de que la Comisión Europea haya retrasado el examen del prorrateo formulario hasta 2031 suscita dudas sobre la eficacia de la iniciativa para frenar las prácticas de traslado de beneficios.

La competencia fiscal y la elusión del impuesto de sociedades tienen implicaciones más amplias para los trabajadores, como el agotamiento de los presupuestos públicos, la reducción de la financiación de los servicios públicos, las desigualdades de ingresos y los obstáculos para obtener una participación justa en los beneficios empresariales a través de la negociación colectiva. La UE podría establecer un tipo mínimo del impuesto de sociedades de al menos el 25%. El Observatorio Fiscal de la UE<sup>68</sup> muestra que esto aumentaría los ingresos del impuesto de sociedades de la UE en aproximadamente 170.000 millones de euros al año en 2021, superando el 50% de los ingresos actuales del impuesto de sociedades recaudados en la Unión Europea y constituyendo el 12% del gasto sanitario total de la UE. Si se tiene en cuenta la recaudación de una parte del déficit fiscal adeudado por las multinacionales no pertenecientes a la UE, esta cifra podría aumentar hasta los 200.000 millones de euros anuales.

Por último, los gobiernos deberían dar prioridad a un sistema fiscal progresivo. Los responsables políticos deberían, por

ejemplo, estudiar la equiparación de los tipos del impuesto sobre las plusvalías y los dividendos con el impuesto sobre la renta, un impuesto sobre la riqueza neta de las personas con patrimonios netos muy elevados y otras formas de fiscalidad progresiva para recaudar fondos con los que financiar unos servicios públicos de calidad, una política industrial ecológica específica y condicionada y una transición socialmente justa. Lo ideal sería que esta medida permitiera una reducción del impuesto para los hogares con rentas bajas.

### Fondo de inversión a largo plazo de la UE

El fondo de la UE Next Generation, creado para responder a la pandemia del virus Covid-19, fue considerado un éxito por la Comisión<sup>69</sup>. Existen razones de peso para establecer una capacidad de inversión a largo plazo de la UE de mayor envergadura que permita a todos los gobiernos europeos satisfacer sus necesidades de inversión social y ecológica. El programa Next Generation EU, diseñado como respuesta a los retos planteados por la pandemia COVID-19, ha demostrado ser una herramienta crucial para fomentar la recuperación y acelerar las transiciones verde y digital<sup>70</sup>. Sin embargo, la necesidad de inversión continua en ámbitos clave como las infraestructuras, la innovación y la cohesión social persiste más allá de la crisis inmediata. Una capacidad de inversión a largo plazo de la UE proporcionaría un marco estable y previsible para abordar los retos estructurales y promover proyectos estratégicos que contribuyan a los objetivos de la Unión. Este compromiso sostenido con la inversión puede estimular la creación de empleo, mejorar la competitividad y reforzar la posición de Europa en la economía mundial. Además, reforzaría la capacidad de la UE para hacer frente a los nuevos retos, como el cambio climático y los avances tecnológicos, apoyando la investigación y el desarrollo, fomentando la innovación y promoviendo un modelo económico más sostenible e integrador. Al prolongar el impulso generado por



la UE de Próxima Generación, una capacidad de inversión a largo plazo garantizaría que la Unión Europea se mantuviera a la vanguardia del progreso económico y la resiliencia en los años venideros. No obstante, la puesta en marcha de un fondo de inversión a largo plazo de la UE no es suficiente por sí sola, y las normas fiscales deben reformarse con sensatez para reconocer el papel de la inversión pública en el fortalecimiento de nuestras economías y su contribución a la sostenibilidad de la deuda.

Junto con una condicionalidad social específica, un fondo de inversión de la UE con recursos suficientes tendría un doble beneficio. Al garantizar que los trabajadores negocien colectivamente para reclamar salarios justos o exigir la mejora de las cualificaciones y la contratación de aprendices, la financiación pública puede aprovecharse para maximizar la protección y la creación de empleos de calidad en toda Europa. Además, la condicionalidad puede utilizarse para centrar la creación de empleo en las zonas más necesitadas, reducir la desigualdad regional y reforzar la cohesión social. Garantizar que el dinero público se destina al bien común aumentará la confianza en la UE y en las instituciones nacionales.

## Conclusiones

Este análisis revela que el acuerdo político final sobre las normas fiscales de la UE introduce unos estrictos parámetros de deuda y déficit, que hacen que sólo tres países, Dinamarca, Suecia e Irlanda, puedan permitirse las inversiones sociales y ecológicas necesarias. Sólo otros dos, Croacia y Lituania, podrían hacer frente a las necesidades de inversión social y ecológica si se mantuvieran las subvenciones del FRR.

Estas conclusiones muestran que los políticos deberían rechazar el planteamiento de dar prioridad a la reducción arbitraria de los ratios de deuda y déficit frente a los apremiantes retos sociales, climáticos y de empleo. Tales recortes empobrecen a Europa, dañan el tejido social de la UE, su capacidad productiva y su habilidad para invertir en una economía más fuerte y resistente. Hacer frente a estos retos exige mayores inversiones públicas, especialmente en infraestructuras sociales e iniciativas ecológicas, para promover el desarrollo económico y mitigar los riesgos climáticos.

Para que todos los Estados miembros cumplan sus requisitos de financiación adicional, se calcula que se necesitarían entre 300 000 y 420 000 millones de euros anuales (entre el 2,9% y el 2,9% del PIB de la UE), suponiendo que la financiación se asignara perfectamente para que los países cumplieran nuestras estimaciones calculadas sobre la brecha ecológica y social. Esto podría cubrirse con normas fiscales más flexibles, nuevos impuestos progresivos y la creación de un fondo de inversión a largo plazo de la UE. Si no se toman medidas, estas lagunas no harán más que crecer y causar importantes problemas en el futuro. La UE debe tratar este asunto con urgencia.

# Notas finales

- 1 [Commission proposes new economic governance rules fit for the future](#)
- 2 [New EU Fiscal Rules Jeopardise Investment Needed To Combat Climate Crisis](#)
- 3 [World Economic Outlook, April 2023](#)
- 4 [Proposal for a Joint Employment Report from the Commission and the Council](#)
- 5 [The EU's healthcare workforce in crisis](#)
- 6 [EU's richest 10% emit as much planet-heating emissions as half the EU's poorest population](#)
- 7 [Anger as France slashes green transition budget by €1.4 billion](#)
- 8 [Climate-related measures in the Budget and Spending Review](#)
- 9 [A catalogue of Orpo-Purra Government cuts brochure](#)
- 10 [Germany solves budget spat by cutting climate fund and increasing energy taxes](#)
- 11 [Ifo Institute lowers growth forecast for 2024 \(in German\)](#)
- 12 [Privatising our future: an overview of privatisation, marketisation and commercialisation of social services in Europe](#)
- 13 [Austerity Measures in Crisis Countries – Results and Impact on Mid-term Development](#)
- 14 [Privatization in the European Union: A Critical Assessment of its Development, Rationale and Consequences](#)
- 15 [Austerity Measures in Crisis Countries – Results and Impact on Mid-term Development](#)
- 16 [Public Private Partnerships in the EU: Widespread shortcomings and limited benefits](#)
- 17 [Why public-private partnerships \(PPPs\) are still not delivering](#)
- 18 [Why public-private partnerships don't work](#)
- 19 [The escalating costs of public-private partnerships in the UK](#)
- 20 [When do public-private partnerships work well?](#)
- 21 [Fossil Fuel to the Fire](#)
- 22 [Interview with Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB](#)
- 23 [OECD Education GPS economic and social outcomes](#)
- 24 [We need universal basic services to tackle the climate crisis](#)
- 25 [Christophers, Brett \(2024\). The Price is Wrong. Why capitalism won't save the planet.](#)
- 26 [Industrial Policy with Conditionality: A Taxonomy and Sample Cases](#)
- 27 [European climate investment deficit report: an investment pathway for Europe's future](#)
- 28 [Road to Zero: Bridging the Gap to net-zero](#)
- 29 [Investments in the sustainability transition: leveraging green industrial policy against emerging constraints](#)
- 30 [Commission working document: Identifying Europe's recovery needs](#)
- 31 [New EU fiscal rules jeopardise investment needed to combat climate change](#)
- 32 [A fair start for all](#)
- 33 [Public borrowing for sustainable investment can help promote UK public debt sustainability and alleviate inflationary pressures](#)
- 34 [The impact of fiscal consolidations on the functional components of government expenditures](#)
- 35 [EU ETS extension could have devastating impact on low-income households](#)
- 36 [Climate measures risk sparking social unrest German agency warns](#)
- 37 [A sustainable Fiscal Pact for Europe](#)
- 38 [Very worrying: trade unions alarmed by EU's industrial collapse](#)
- 39 [EU loses almost 4 million manufacturing jobs in just 4 years](#)
- 40 [The social cost of deindustrialisation](#)
- 41 [New Perspectives on Deindustrialization as Socio-Economic Disintegration](#)
- 42 [US inflation reduction act is driving clean energy investments one year in](#)
- 43 [Unpacking the boom in US construction of manufacturing facilities](#)

- 44 *Ibid.*
- 45 *Ibid.*
- 46 [Pact for Skills: Launch of large-scale renewable energy skills partnership \(europa. EU\)](#)
- 47 [Identifying Europe's recovery needs](#)
- 48 [European Climate Investment Deficit Report: An Investment Pathway For Europe's Future](#)
- 49 [Boosting Investment in Social Infrastructure in Europe](#)
- 50 [EU Financing Policy in the Social Infrastructure Sectors](#)
- 51 [Financing of Social Housing: Study in 6 European Countries](#)
- 52 [Mind the gap—reaching the European target of a 2-year increase in healthy life years in the next decade](#)
- 53 [Road to Net Zero: Bridging the Green Investment Gap](#)
- 54 [A targeted golden rule for public investments?](#)
- 55 [https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility\\_en](https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility_en)
- 56 <https://www.bruegel.org/dataset/european-union-countries-recovery-and-resilience-plans>
- 57 [Social Impact of the Crisis and Developments in the Light of Fiscal Consolidation Measures](#)
- 58 [Environmental Protection Agencies Study](#)
- 59 [The impact of fiscal consolidations on the functional components of government expenditures](#)
- 60 [Assessing the Ecofin compromise on fiscal rules reform](#)
- 61 *Ibid.*
- 62 [A budget deficit that results from a fundamental imbalance in government receipts and expenditures, as opposed to one based on one-off or short-term factors.](#)
- 63 [The impacts of the Covid-19 pandemic on EU cohesion and EU cohesion policy](#)
- 64 [Europe's bumper Q2 puts global dividend payouts on track for record year](#)
- 65 [European de-equitisation comes of age](#)
- 66 [European Green Deal](#)
- 67 [Commission: Business in Europe: Framework for Income Taxation \(BEFIT\)](#)
- 68 [Collecting the Tax Deficit of Multinational Companies](#)
- 69 [Statements by Executive Vice-President Dombrovskis and Commissioner Gentiloni at the press conference on the mid-term evaluation of the Recovery and Resilience Facility](#)
- 70 *Ibid.*

NEW  
ECONOMICS  
FOUNDATION

CONFEDERATION  
SYNDICAT  
EUROPEAËN  
TRADE UNION

[www.etuc.org](http://www.etuc.org)